

todo el correspondiente al gobierno Uribe —además de los actos violentos de contrainsurgencia en sí—, constituyen mecanismos de disciplinamiento y control social, en la medida en que desalientan procesos sociales de resistencia, reivindicación o transformación, mediante la estigmatización, criminalización o represión de los mismos, reforzando así la inmutabilidad del sistema capitalista como estructura ordenadora y articuladora de la sociedad.

La “pacificación” y reconfiguración territorial

La *paz* perseguida por los proyectos políticos de Uribe y Santos, era entonces la *paz* requerida por el capital para sus procesos de acumulación y reproducción en el país. En este sentido, uno de los objetivos centrales, tanto de la política de Seguridad Democrática, como de los Diálogos de Paz, fue adecuar el territorio a las necesidades actuales del capital y, en especial, del capital trasnacional. La primera se enfocó en recuperar militarmente amplias zonas del territorio nacional con el fin de lograr la seguridad requerida por el capital para moverse libremente, transportar mercancías y establecer inversiones.¹⁷ De esta manera, Uribe logró incrementar la inversión extranjera directa en un 164% durante su primer mandato, concentrada en el sector minero y de hidrocarburos (Rodríguez 2014), es decir, en los sectores ejes de acumulación del patrón de reproducción actual. A su vez, garantizó la seguridad para el capital de la clase terrateniente y la burguesía ganadera a la que dicha administración representó. No obstante, el gobierno de Uribe obtuvo estos resultados a un alto costo social, pues del total de víctimas y desplazados del conflicto armado en Colombia durante los últimos 30 años, la ofensiva militar emprendida por este gobierno en sus ocho años de duración ocasionó el 44% de las víctimas (más de 3 millones y medio de personas) y el 45% de los desplazados (más de 3 millones de personas) (Valencia, 10-09-16). Sumado a lo anterior, Uribe implementó otras medidas de ordenamiento territorial en detrimento de los campesinos, como la no adjudicación de Zonas de Reserva Campesina bajo su gobierno. Todo esto, sin embargo, también contribuyó al alistamiento del territorio para la inversión.

Asimismo, los Diálogos de Paz, y ahora la implementación de los Acuerdos, buscan la recuperación de la parte del territorio nacional que se encontraba

17 La política de Seguridad Democrática fue reforzada por el Plan Patriota y por su segunda fase denominada Plan Consolidación, cuyos objetivos respectivamente eran recuperar, de la influencia de las FARC, los cascos urbanos y las vías de comunicación, así como desarticular la presencia de la guerrilla en las zonas rurales. En otras palabras, el fin principal era la recuperación del territorio urbano y rural cooptado por las FARC. Estos planes son considerados como la última etapa o la continuación del Plan Colombia, en la medida en que también contaron con la financiación del gobierno estadounidense.